lanacion.com

Política

El escenario

La principal política pública

Sergio Berensztein
Para LA NACION

Domingo 13 de febrero de 2011 |

La inflación es la principal política pública que ha venido desarrollando el gobierno nacional desde comienzos de 2006. Afecta a todos los argentinos, independientemente de su nivel de ingreso, edad, sexo, lugar de residencia y preferencias político-partidarias. Genera incertidumbre, desazón, bronca e impotencia. Desalienta el ahorro, la inversión, la innovación y los esfuerzos que deberían hacer en conjunto el Estado y el sector privado para incrementar la competitividad y la calidad del empleo.

Aunque no se manipularan groseramente las estadísticas públicas para intentar vanamente ocultarla, de todas formas la inflación es una estafa al conjunto de la sociedad, pues produce desconfianza en la moneda nacional y distorsiona las expectativas de los agentes económicos. Vale decir, incentiva que los individuos, las familias y las empresas tomen decisiones defensivas pensando solamente en el muy corto plazo, tratando de perder lo menos posible.

Esto significa que la inflación impide que se establezcan los mecanismos cooperativos que explican el progreso en el largo plazo y que requieren estabilidad macroeconómica y reglas del juego político predecibles, incluidas la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contratos. En verdad, la inflación constituye nada más ni nada menos que una violación flagrante del contrato social.

Por eso el mundo civilizado (en la región lo hacen Brasil, Chile, Perú, Uruguay) lucha contra la inflación, que se convirtió en la principal preocupación ahora que la etapa más aguda de la crisis financiera internacional parece haber quedado atrás. Una inflación del 5% anual ya dispara las alarmas y comienzan entonces a implementarse políticas monetarias, fiscales y cambiarias para controlarla.

Primera evidencia de que algo raro pasa en la Argentina: el Gobierno reconoce una inflación oficial que es el doble de alta y nunca ha evidenciado preocupación al respecto. Predomina en las actuales autoridades una notable ignorancia, o un grave desprecio, por los estándares internacionales que definen el arte del buen gobierno. No hacía falta que Barack Obama haya decidido ignorar al país en su próximo viaje a la región para recordarnos que vivimos uno de los momentos de mayor aislamiento cultural y político que se tenga memoria.

¿Cómo explicar entonces que, como sugiere la encuesta que Poliarquía realizó en exclusiva para La Nacion, la inflación no sea una prioridad para la ciudadanía? En realidad, esto ocurre cuando se pregunta acerca de los principales problemas del país, pero está en tercer lugar, luego de la inseguridad y del desempleo, cuando se indaga sobre los problemas personales.

Es entonces el pánico que genera un episodio grave de inseguridad o el no menos espantoso miedo a perder el empleo lo que opera en conjunto desplazando a la inflación. Predomina el sentido común: ante el miedo a la muerte o al hambre y la marginalidad, es evidente que cualquier ser humano sensato tendrá menos preocupación, en términos relativos, por la inflación. Esto explica que sean los sectores de mayores ingresos y educación, los que expresan mayor preocupación por el tema.

La edad de los entrevistados es también una clave analítica relevante: la población mayor de 50 años, que experimentó en

carne propia el flagelo de la inflación de los 70 y sobre todo de la hiper y el estancamiento de los 80, tiene una comprensión mucho mayor de los efectos deletéreos y de largo plazo de este fenómeno. Los más jóvenes, que ingresaron en el mercado de trabajo en los últimos 20 años, y que sufrieron directa o indirectamente el ciclo inédito de altísimo desempleo que padeció el país entre 1995 y 2005, están hoy mucho más preocupados por perder el trabajo que por la caída de su salario real. Si se lo analiza desde la perspectiva de los actores, es bastante natural que eso ocurra.

Sobre todo en un país que padece una pobreza alarmante en el debate público: la Argentina se quedó sin interlocutores legitimados que de manera efectiva y contundente puedan explicar de forma sencilla y entendible la naturaleza compleja de los fenómenos de la economía política (y no sólo de ellos). Esto incluye la crisis de la convertibilidad y el boom de los bienes primarios exportables. El tema más crítico que queda sin esclarecer es la inflación: sus causas, sus mecanismos transmisores y sus efectos de corto y largo plazo.

Ya sabemos que los partidos políticos quedaron reducidos, a lo sumo, a meras maquinarias electorales: pocas ideas pueden esperarse de ellos. Tampoco el Congreso es un espacio relevante para el debate de ideas. Las universidades, públicas y privadas, hacen un esfuerzo notable por ignorar los temas de la agenda ciudadana. La mayoría de los pocos *think tanks* que le quedan al país tratan de sobrevivir como pueden, o han sido cooptados por el Gobierno. El proceso de deliberación de políticas públicas, elemental en una sociedad democrática, está reducido a su mínima expresión.

Este vacío de ideas se alimenta en el desinterés en la cosa pública que afecta a buena parte de la sociedad civil, cada vez más ensimismada y recluida en la vida privada. El boom del consumo es también una manifestación de este fenómeno.

Gracias a esta mutilación del capital social, acelerado por el retorno de un Estado intervencionista, omnipresente e ineficaz para proveer los bienes públicos esenciales, el oficialismo puede hacer las afirmaciones más absurdas o lanzar pomposamente programas de alcance ínfimo y efímero, tipo "milanesas para todos", sin que haya voces calificadas que expresen su indignación por su pobreza conceptual y su frecuente perversidad.

Una de las consecuencias más alarmantes de esta situación es que buena parte de la ciudadanía confunda las causas con los efectos de la inflación. Los empresarios aumentan en efecto los precios porque el Banco Central, uno de los ejemplos más patéticos de la degradación institucional que padece la Argentina, emite descontroladamente billetes. Lo hace para que el Gobierno gaste mucho más de lo que le permite el Congreso, que, de ese modo, tampoco puede cumplir con su función constitucional de controlar al Poder Ejecutivo.

Por eso, la inflación es el modelo económico predilecto del hiperpresidencialismo, que tira la piedra y esconde la mano, para acusar luego a las víctimas de no ser "responsables" frente al incremento generalizado de los precios o, peor, de provocarlo. Los dos países con más inflación del mundo son la Argentina y Venezuela.

El autor es director de Poliarquía Consultores